Proceso: Declarativo Especial de Expropiación
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Demandado: María Miriam Becerra Ayala y otros
Interlocutorio No. 427

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 09 de diciembre de 2022

Paso a despacho para resolver, el recurso de reposición impetrado por el apoderado de los señores Octavio de Jesús Calvo, María Liceria Calvo, Arbey Antonio Calvo Ayala y María Lucrecia Calvo Ayala., quienes presentaron oposición a la diligencia de entrega.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Rad. 2022-00187-00

Procede el despacho a resolver el recurso de reposición impetrado por el apoderado judicial de los señores Octavio de Jesús Calvo, María Liceria Calvo, Arbey Antonio Calvo Ayala y María Lucrecia Calvo Ayala dentro del presente tramite declarativo especial de expropiación presentado por **la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-** en contra de **María Miriam Becerra Ayala** y otros.

Para resolver se tiene,

ANTECEDENTES:

La demanda fue admitida mediante providencia del 29 de septiembre del año en curso, realizándose los ordenamientos propios del proceso, entre ellos, la entrega del inmueble.

A fin de llevar a cabo la diligencia, el despacho ordenó comisionar a los Juzgado de esta municipalidad, correspondiendo por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Riosucio, Caldas.

El juzgado Comisionado, informo a este despacho que la diligencia fue iniciada el 10 de noviembre del año en curso, disponiéndose la entrega de manera provisional, pero la diligencia no ha culminado a raíz que existen ocupantes en el inmueble a los cuales se les concedió tres (3) días hábiles para retirarse, por ende, no ha culminado la diligencia de entrega y se autorizó subcomisionar.

Proceso: Declarativo Especial de Expropiación
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Demandado: María Miriam Becerra Ayala y otros
Interlocutorio No. 427

Mediante apoderado judicial, los señores Octavio de Jesús Calvo, María Liciria Calvo, Arbey Antonio Calvo Ayala y María Lucrecia Calvo Ayala radicaron ante este despacho escrito de oposición, lo cual, en auto del 25 de noviembre del año en curso, se advirtió dar el trámite una vez culminada la diligencia de entrega.

Decisión contra la cual, los opositores presentan recurso de reposición. Se advierte que, se prescinde del traslado del presente recurso, por lo motivos que serán objeto de análisis en esta providencia.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico y tesis del juzgado

1. ¿Es procedente dar trámite al recurso de reposición y, en subsidio de apelación impetrado por los señores Octavio de Jesús Calvo, María Liciria Calvo, Arbey Antonio Calvo Ayala y María Lucrecia Calvo Ayala contra la decisión adoptada el 25 de noviembre del año en curso? El juzgado estima que la respuesta al anterior problema jurídico es negativa, tal como pasa a exponerse.

El escrito presentado por el apoderado judicial de los señores Octavio de Jesús Calvo, María Liciria Calvo, Arbey Antonio Calvo Ayala y María Lucrecia Calvo Ayala, va encaminado a que se revoque la decisión y se otorgue la posibilidad de exceptuar la entrega anticipada del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 115-8287, en aras de garantizar y de salvaguardar el derecho que tiene toda persona a gozar de una vivienda digna.

En orden a resolver, tenemos que el recurso de reposición se encuentra contemplado en el artículo 318 del C.G.P, y es aquel que se interpone ante el mismo juez, para que este a su vez, revoque o reforme la decisión.

Es requisito necesario para su viabilidad, que se interponga, por escrito o verbal, se le expongan al juez las razones por las cuales se considera que la decisión está equivocada, de acuerdo a la norma en mención, este recurso procede contra todos los autos que dicta el juez, con algunas excepciones.

Todo requisito debe cumplir con una serie de exigencias formales en orden que pueda darse su trámite para asegurar que posteriormente sea decidido, en este aspecto indica el doctrinante Hernán Fabio López Blanco, que *“Esos requisitos son concurrentes necesarios, es decir, que todos deben reunirse y basta que falte tan solo uno de ellos para que se niegue el trámite del mismo o, iniciada la actuación, se disponga su terminación antes de llegar a decidir el respectivo recurso”*.

Los elementos sobre los que se viene haciendo énfasis son los que seguidamente relacionamos: i) **legitimidad procesal en el promotor**, debiéndose anotar que en principio se surte por los sujetos que actúan como enfrentados en el litigio o terceros intervinientes ii) **que la resolución judicial cuestionada implique un perjuicio para los intereses del impugnante**, en términos generales, que la decisión adoptada sea desfavorable a sus aspiraciones, por consiguiente, si la providencia no ocasiona un perjuicio material o moral a una de las personas habilitadas para recurrir, no tendrá capacidad para interponer el recurso iii) **la oportunidad para proponer el recurso** surge este requisito, en atención a la preclusión, lo que se busca es que se ejerzan dentro de la oportunidad señalada por la ley para hacerlo iv) **la procedencia del recurso** claro es que no todas las decisiones emitidas en el transcurso del trámite pueden ser recurridos por conducto de citado reproche, si no únicamente los que la disposición legal señaló específicamente v) **la motivación de los recursos** no basta con el deseo de la parte de recurrir de una determinada providencial, sino que debe indicar el porqué de su inconformidad vi) **que el escrito haya sido incoado con obediencia de las ritualidades y directrices previstas por el reglamento que los disciplina** –art. 322 *ibidem*- en el entendido de que el recurso debe impetrarse ante el despacho jurisdiccional que expidió la objetada providencia, en el término de ley y con las formalidades.

Tal como ha sido expuesto, el recurso va encaminado a que el juez de instancia estudie su decisión y si es procedente cambiar la misma, en este sentido, advierte este despacho judicial, que los opositores discuten la negativa de dar el trámite a la oposición y además que la orden de continuar con la diligencia de entrega, y en este sentido, para este despacho no se cumple con el requisito de legitimación para proponer tal recurso, pues véase que los opositores no son parte dentro del litigio ni se encuentran reconocidos por terceros intervinientes, por ende, no le es dable presentar el presente escrito.

Veamos que el artículo 399 del Código General del Proceso, establece la posibilidad de que la parte actora solicite la entrega provisional del inmueble previa consignación del avalúo, como efectivamente ocurrió en las presentes diligencias, pues ello, cuenta con asidero jurídico dado que usualmente la entidad requiere la posesión del bien a fin de continuar con las obras de interés público y común.

Erra el apoderado judicial de los opositores, al considerar que la diligencia de entrega debe ser suspendida o adelantada de forma transitoria, pues precisamente el numeral 11 del artículo 399 del Código General del Proceso, dispone que la diligencia de entrega se llevará a cabo así exista oposición, expresión que valga advertir únicamente hace referencia a la oposición al monto del avalúo, pues es claro la misma no puede ser enfocada para no adelantarse la entrega solicitada y ordenada por el despacho.

En ese sentido, bien podría pensarse que al existir oposiciones pendientes de resolver, estas personas forman parte de la litis de la demanda y podría existir legitimación en la causa para proponer los recursos, sin embargo, ello sería a todas luces desacertado, pues las mismas solo podrán resolverse en el momento que culmine la diligencia de entrega, como bien lo dispone la norma antes referenciada

Proceso: Declarativo Especial de Expropiación
Demandante: Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-
Demandado: María Miriam Becerra Ayala y otros
Interlocutorio No. 427

al indicar “(...) *la entrega se efectuará, pero se advertirá al opositor que dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente para que se le reconozca su derecho (...)*”. Lo cual, debe atenderse en concordancia con el artículo 40 del C.G.P.

Ahora, las razones en que el recurrente fundamenta su recurso, son propias de ser analizadas al momento de resolver las oposiciones presentadas, y no a través de este medio defensivo al cual no se encuentra configurado la legitimación para proponerlo.

En ese orden, se rechaza de plano el recurso impetrado por los opositores, conforme fuera expuesto anteriormente, no cuentan con legitimación en la causa por activa.

Por último, no se concede el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria por cuanto la decisión refutada no se encuentra en listado en el artículo 321 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, **el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio (Caldas),**

RESUELVE:

PRIMERO: Rechazar de plano el recurso de reposición impetrado por el apoderado judicial de los señores Octavio de Jesús Calvo, María Liciria Calvo, Arbey Antonio Calvo Ayala y María Lucrecia Calvo Ayala dentro del presente tramite declarativo especial de expropiación presentado por **la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-** en contra de **María Miriam Becerra Ayala** y otros, por lo expuesto anteriormente.

QUINTO: **NEGAR** el recurso de apelación formulado de manera subsidiaria, por lo expuesto anteriormente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a27a7fa760d0b166d4689658d0e3cf45d9bfc73e343ca200d51689238729882f**

Documento generado en 09/12/2022 08:31:52 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 09 de diciembre de 2022

CONSTANCIA: Le informo a la señora Juez que el 06 de diciembre de 2022, feneció el término para impugnar el fallo, dado que la notificación se adelantado de manera electrónica, en tiempo oportuno el actor popular allego escrito.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio Caldas, nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Rad. 2022-00137-00

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede y por haberse presentado el recurso dentro del término concedido para ello, en el efecto **suspensivo** -*art. 37 de la Ley 472 de 1998 y art. 323 del C.G.P.*- y ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, se **concede** el recurso de apelación formulado por el accionado frente a la sentencia proferida el día 25 de noviembre del presente año, en la acción popular promovida por **Mario Alberto Restrepo Zapata.**, contra **Tienda D1 Koba Colombia S.A.S.**

En firme este proveído, envíese el expediente digital a la superioridad para los fines del recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito

Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ef1c7d60c3f05dab70a1deda6a6c52546c910fc18d0d8eb9a75235064dfb15fb**

Documento generado en 09/12/2022 08:31:51 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA

Riosucio, Caldas, 09 de diciembre de 2022

A despacho de la señora Juez, informando que la parte actora presento al despacho escritos de notificación de la demanda adelantados a los señores **Eduardo Cataño Ramírez, Dora Cataño Ramírez.**

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Rad. 2022-00188-00

Dentro de la presente demanda **Ordinaria Laboral de Primera Instancia** adelantado por **Uriel de Jesús López Valencia**, contra **Eduardo Cataño Ramírez, Dora Cataño Ramírez y Luz Marina Cataño Ramírez** se encuentra pendiente adelantar en debida forma las notificaciones de los codemandados.

En ese sentido, se evidencia que la parte demandante remitió a los codemandados **Eduardo Cataño Ramírez, Dora Cataño Ramírez** un documento que denomino "NOTIFICACIÓN DEMANDA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA", sin embargo, el mismo no cumple con el ordenamiento procesal, pues ello se esta adelantando de forma física y por ende, debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 291 y siguientes del Código General del Proceso y el Código Procesal del Trabajo, esto es, deberá el demandante remitir primeramente la citación para notificación personal y posterior a ello, la notificación por aviso, y no un híbrido de la notificación física y electrónica.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño

Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **08ca4f3f1b84142b03e1a77ac5604ed530342872d1950d6e93db62e1a1818b4d**

Documento generado en 09/12/2022 08:31:51 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 09 de diciembre de 2022

A despacho de la señora Juez el presente incidente de desacato, la Nueva Eps S.A se pronunció sobre el requerimiento.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Rad. 2022-00209-00

I. OBJETO DE DECISIÓN:

Procede el despacho a tomar las siguientes decisiones: (i) abrir el incidente de desacato promovido a instancias la señora **CRUZ ELENA SALAZAR DE GRAJALES**, por incumplimiento al fallo de tutela proferido por este despacho día 09 de noviembre de 2022; y (ii) decretar las pruebas en el presente trámite.

II. ANTECEDENTES:

1. La señora **CRUZ ELENA SALAZAR DE GRAJALES** informó al despacho sobre el incumplimiento del fallo antes referido, en donde se dispuso, entre otros, lo siguiente:

“Segundo: ORDENAR a la accionada NUEVA EPS S.A. por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, para que dentro del término perentorio e improrrogable de por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro del término perentorio e improrrogable de VEINTICUATRO (24) HORAS proceda a programar con un prestador de su red de servicios la efectiva materialización de los procedimientos vaciamiento central, recesión traqueal y reconstrucción laringotraqueal.

(...)

2. Teniendo en cuenta la manifestación de incumplimiento formulado por la incidentante, este despacho antes de iniciar el incidente de desacato deprecado, en cumplimiento del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, mediante interlocutorio del 01 de diciembre del presente año se requirió a la Gerente de la Nueva EPS - Zonal Caldas- y a sus superiores jerárquicos; la primera para que informara en el término de tres (3) días si le había dado cumplimiento al fallo de tutela antes

referido y los segundos para que, en el mismo término, lo hiciera cumplir e iniciaran, si fuera el caso, la investigación disciplinaria en contra de aquella.

3. La Nueva EPS contestó el requerimiento a través del representante legal judicial, manifestando que la solicitud había sido trasladada al área técnica de auditoría en salud, encargada de revisar el presente asunto, y además solicita excluir y desvincular al Dr. José Fernando Cardona Uribe en calidad de presidente de NUEVA EPS, por no ser el funcionario encargado de cumplir la sentencia de tutela, ni se el superior jerárquico encargado.

III. CONSIDERACIONES:

Estipula el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 lo siguiente:

“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

*La sanción será impuesta por el mismo juez **mediante trámite incidental** y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”. (Resalta el despacho).*

La Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente sobre la competencia para conocer del incidente de desacato derivado de fallos de tutela:

“... De la lectura del inciso segundo del artículo 5, se deduce claramente que el adjetivo “mismo” se utiliza para referirse al juez de primera instancia, o según el caso, al juez que profirió la orden, toda vez que exclusivamente a él se refiere el inciso primero del artículo. No importa si dicho juez conoció la acción en primera o segunda instancia, toda vez que al tenor de lo prescrito por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la impugnación del fallo no es óbice para su incumplimiento, es decir, aun mediando impugnación, el fallo debe ser cumplido de inmediato”¹

A su vez, en la sentencia T-1038 de 2000 se expuso lo siguiente:

“...7. En conclusión, la Sala encuentra que el juez de primera instancia (singular o plural), que haya conocido el trámite de tutela, es en todo caso el competente para conocer del trámite incidental por desacato. Esta interpretación tiene fundamento en los siguientes aspectos: (i) Obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) está en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta.”

En lo relacionado con la naturaleza jurídica del incidente de desacato, la misma Corporación expresó en Sentencia T-188-02 lo que a continuación se transcribe:

“En el evento de presentarse el desconocimiento de una orden proferida por el juez constitucional, el sistema jurídico tiene prevista una oportunidad y una vía procesal

¹ Corte Constitucional Sentencia C-243 del 30 de mayo de 1996.

específica, con el fin de obtener que las sentencias de tutela se cumplan y, para que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.”

Así las cosas, el legislador previendo la contingencia del incumplimiento a los fallos de tutela y como desarrollo del Estado de Derecho con sus implicaciones de seguimiento tanto a las normas como a las decisiones judiciales por parte de los administrados, estableció el desacato como la vía expedita para lograr el cumplimiento forzado del fallo del juez constitucional, procedimiento que debe conocer el juez que emitió la decisión mediante trámite incidental.

Ahora bien, ante la manifestación de incumplimiento del fallo de tutela proferido por este despacho, se dispuso el requerimiento antes de dar inicio al incidente de desacato, sin embargo, la respuesta a dicho requerimiento no cumple con lo necesitado por el accionante, pues véase que simplemente manifiestan que fue trasladado al área técnica, por tanto, se dispondrá la apertura del incidente de desacato en contra de la funcionaria de la Nueva EPS responsable directa de darle cumplimiento al fallo de tutela, la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- doctora Martha Irene Ojeda Sabogal, y de sus superiores jerárquicos. Incidente que se le dará el trámite establecido en el artículo 129 del Código General del Proceso.

También se advierte, que no es procedente excluir y desvincular al presidente de la Nueva EPS S.A, toda vez, que, el requerimiento hacía este funcionario, fue en calidad de encargado de hacer cumplir el fallo de tutela y adelantar las acciones disciplinarias pertinentes frente a los funcionarios renuentes a cumplir el mandato tutelar, y en este sentido, se establece importante para el incidente de desacato vincular en el inicio del mismo.

De igual manera, a fin de delimitar el plazo del incidente en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional², se decretarán en este mismo proveído las pruebas que han de practicarse.

Por lo expuesto, el **Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas,**

RESUELVE:

PRIMERO: Iniciar el trámite del incidente de desacato al fallo de tutela proferido por este despacho el día 09 de noviembre de 2022 en contra de la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- doctora **Martha Irene Ojeda Sabogal**, así como de sus superiores jerárquicos la Gerente de dicha entidad -Regional Eje Cafetero- doctora **María Lorena Serna Montoya** y el Gerente General de dicha entidad doctor **José Fernando Cardona Uribe**.

SEGUNDO: Correr traslado por el término de tres (3) días a la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- doctora **Martha Irene Ojeda Sabogal**, a la Gerente de dicha entidad -Regional Eje Cafetero- doctora **María Lorena Serna Montoya** y al Gerente General de dicha entidad doctor **José Fernando Cardona Uribe**, para que se pronuncien al respecto y presenten los documentos que consideren pertinentes en el presente asunto.

² Sentencia C-367 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.

TERCERO: **Decretar** las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES:

a). Ténganse como tales los documentos allegados por la incidentante.

INFORMES:

a) Se dispone oficiar a la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- doctora **Martha Irene Ojeda Sabogal**, para que en el término de dos (2) días informe a este despacho las razones por las cuales no ha cumplido la orden impartida por este despacho en sentencia de tutela calendada 09 de noviembre de 2022.

b) Se dispone oficiar al Gerente de la Nueva EPS -Regional Eje Cafetero- doctora **María Lorena Serna Montoya** y al Gerente General de dicha entidad doctor **José Fernando Cardona Uribe**, para que en el término de dos (2) días informen a este despacho las gestiones realizadas para hacer cumplir el fallo de tutela calendada 09 de noviembre de 2022.

CUARTO: **Negar** la exclusión y desvinculación solicitada, respecto del Dr. José Fernando Cardona Uribe, por lo expuesto anteriormente.

QUINTO: **Notificar** este proveído a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez(a)
Juzgado De Circuito - Civil Laboral 001 Riosucio

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

8944346fa2c83e17a949086aedc0e5f1c42f13f6347a607cc5ec34d03e48a812
Documento firmado electrónicamente en 09-12-2022

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx>

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Rad. 2022-00224-00

1. ASUNTO A DECIDIR:

Procede el despacho a resolver la acción de tutela incoada por la señora **Eunice Ortiz de Ortiz** en contra del **Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato (Caldas)** a la que fueron vinculados **Aris Mining Marmato S.A.S, Gonzalo Ortiz Escudero, Gloria amparo Ortiz e Castro, Dra. Martha Isabel Pérez Villa** como curador Ad-Litem de los herederos indeterminados del señor **Heli de la Cruz Ortiz Escudero, la Sociedad Responsabilidad Ltda Valencia Perarla, la Sociedad Responsabilidad Ltda Vaencia Ayala, Silvia Patricia Ortiz Ortiz** en calidad de heredera del señor Gonzalo Ortiz Escudero, **Julio César, Jhon Fredy y Claudia Ortiz Viveros** hijos del señor **Heli de la Cruz Ortiz, María Viveros Moreno** por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad.

2. ANTECEDENTES:

2.1. ESCRITO DE TUTELA:

Indica el apoderado judicial de la accionante que, el día 22 de noviembre de 2021 la sociedad Caldas Gold Marmato S.A.S hoy Aris Mining Marmato S.A.S radicó demanda a fin de obtener la indemnización a pagar por el ejercicio de la servidumbre legal minera ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato. Caldas.

A través de apoderado judicial, la señora Eunice presento recurso de reposición en contra del auto admisorio de la demanda, solicitando rechazar la demanda a raíz que no se adelantó en debida forma la notificación de la negociación directa, indicando aspectos sucedidos con los avisos y certificación de aviso radial.

Sumado a ello, se tiene que, el aviso debe intentarse dos (2) veces durante los veinte (20) días anteriores a la presentación de la solicitud de avalúo en el Juzgado, término que valga advertir es obligatorio, en ese sentido, indica se incurrió en un defecto insubsanable por haber excedido los términos procesales.

Todo ello fue puesto en conocimiento del juzgado accionado a través de un recurso de reposición, por ende, el juzgado en decisión del 06 de septiembre del año en curso, inadmite la demanda, pero posterior, ante la subsanación de la empresa, nuevamente admite la demanda.

En ese sentido, indica que la decisión del juzgado es violatoria del derecho fundamental al debido proceso y el derecho a la igualdad de la señora Eunice, incurriendo en defecto fáctico, sustantivo y procedimental al momento de admitir la demanda de la solicitud de avalúo de perjuicios desconociendo la etapa de negociación.

Por lo expuesto, solicita se tutele la protección de los derechos fundamentales, y como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado accionado revocar el auto por medio del cual se admitió la demanda, y como consecuencia de ello, rechazar la misma.

2.2. TRÁMITE DE LA INSTANCIA:

La tutela fue presentada ante los Juzgados del Circuito de Riosucio (Caldas), y este juzgado en su condición de reparto la asumió en razón al factor funcionar, admitiéndola a través de auto del 25 de noviembre de 2022, ordenándose impartir el trámite constitucional, solicitando informe al juzgado accionado, la remisión del expediente digital para su estudio, y vinculación a la interviniente del proceso.

2.3. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA POR PARTE DEL JUZGADO ACCIONADO:

El doctor Jorge Mario Vargas Agudelo titular del despacho accionado, en tiempo oportuno solicitó declarar improcedente la acción de tutela, además refiere que la tutela es temeraria y la parte accionante actúa de mala fe, por cuanto, anteriormente promovió una tutela sobre el mismo proceso, y, por último, remite el link del expediente digital.

2.4. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA POR LA PARTE VINCULADA:

La abogada Martha Isabel Pérez Villa en calidad de curadora Ad-Litem de los herederos indeterminados de Heli Ortiz Escudero, solicita tutelar los derechos en razón a que cada una de las manifestaciones dadas en el escrito de tutela son lo realmente ocurrido en el proceso.

Por su parte, a través de apoderado judicial, las señoras Gloria Amparo Ortiz, Silvia Patricia Ortiz y Gonzalo Ortiz, solicitan tutelar los derechos invocados, en razón a que lo narrando en la acción constitucional tiene asidero.

También, se allega escrito proveniente del apoderado judicial de la sociedad Aris Mining Marmato S.A.S, la cual no se tendrá en cuenta a raíz que no se aportó poder para actuar en el presente trámite constitucional.

3. CONSIDERACIONES:

3.1. PROBLEMA JURÍDICO:

Como se indicó en el acápite de antecedentes, la señora **Eunice Ortiz de Ortiz** presentó acción de tutela por considerar que el Juzgado Promiscuo Municipal de

Marmato, Caldas., vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Con fundamento en lo anterior, este despacho deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿el Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato, Caldas., vulneró el derecho al debido proceso de la señora Eunice Ortiz de Ortiz al confirmar la admisión del proceso de avalúo de servidumbre minera, establecido en la ley 1274 de 2009, sin tener en cuenta las falencias advertidas en el trámite de negociación directa?

Para resolver la cuestión planteada, es necesario analizar la procedencia de la acción de tutela, para lo cual se examinarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales; (ii) el examen de los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales; (iii) el defecto procedimental absoluto por indebida notificación; y (iv) el análisis del caso concreto.

Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales

El artículo 86 Superior establece que la tutela procede contra toda “*acción u omisión de cualquier autoridad pública*”. Los jueces son autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución y a la ley, y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos reconocidos en la Constitución.

Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo.

La acción de tutela contra decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez constitucional de una providencia que incurre en graves falencias, que la tornan incompatible con la Carta Política¹.

La Sala Plena de la Corte, en la **sentencia C-590 de 2005**², señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.

Ahora bien, dado que, la providencia cuestionada es el auto mediante el cual se admite la demanda de avalúo de perjuicios por imposición de servidumbre minera con ocupación transitoria, se debe recordar brevemente la jurisprudencia sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra autos interlocutorios.

¹ Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.

² M.P. Jaime Córdoba Triviño

El concepto de providencia judicial en el marco de la doctrina de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades judiciales.

Sin embargo, en materia de decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que éstas, por regla general, deben ser discutidas por medio de los recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto.

Por ello la procedencia de la acción de tutela es excepcional y solo ocurre i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados; o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable. En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por la Corte Constitucional.

La primera oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto interlocutorio fue en la sentencia T-224 de 1992³. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto de esta naturaleza también puede vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que era posible acudir a la acción de tutela.

Posteriormente, en las sentencias T-025 de 1997, T-1047 de 2003 y T-489 de 2006, la Corte admitió la procedencia de la tutela contra autos interlocutorios, aunque en esos casos no concedió la tutela en sede de revisión. En la sentencia T-025 de 1997, se trataba de un auto del Consejo de Estado que denegaba una solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación directa. En la sentencia T-1047 de 2003, la tutela se dirigía contra un auto que negaba la libertad provisional solicitada por un recluso. Y, finalmente, en la sentencia T-489 de 2006, se trataba de una tutela contra un auto que en sede de apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación dentro de un proceso ejecutivo.

Con fundamento en las consideraciones jurisprudenciales previamente expuestas, le corresponde a este despacho judicial determinar en el caso

³ En la sentencia T-224 del 17 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón, la Corte revisó una acción de tutela promovida por un ciudadano colombiano residente en los Estados Unidos, quien alegaba que un auto interlocutorio dictado en el marco de un proceso de alimentos que le impedía abandonar el país, vulneraba su derecho fundamental al debido proceso. El tutelante alegaba que el auto era arbitrario, pues había puesto a disposición del juzgado demandado un automóvil y un inmueble para respaldar sus obligaciones. Además, alegaba que su trabajo en los Estados Unidos era su fuente de ingresos y el que le permitía pagar las cuotas de alimentos de las que era responsable. La Corte concedió la tutela, ya que consideró que los hechos ponían de presente una manifiesta y palmaria violación de los derechos fundamentales del petente. En consecuencia, la Corte ordenó a la juez demandada celebrar una audiencia especial con el objeto de examinar la situación planteada y tomar la decisión que de conformidad con la Constitución y la ley, asegurara el respeto a los derechos fundamentales de las partes.

concreto, si como lo alega la accionante, el Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato, Caldas., vulneró el derecho al debido proceso, al omitir analizar en debida forma la negociación directa.

Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

De conformidad con la línea jurisprudencial uniforme y actual de esta Corporación desde la **sentencia C-590 de 2005**⁴, los **requisitos generales** de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

Examen de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso que se analiza

Esta judicatura observa que en este caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que ha fijado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, tal y como se muestra a continuación:

En primer lugar, la cuestión objeto cumple con el presupuesto de **relevancia constitucional**. Pues dentro de la acción constitucional, se evidencia que la parte actora hace una narración clara y fundamentada de la presunta vulneración, en razón a las decisiones que ha adoptado el despacho. En efecto, se evidencia una situación de relevancia constitucional, en la medida en que *prima facie*, la accionante presuntamente resulta afectada en sus derechos fundamentales en razón a la negociación previa adelantada por parte de la sociedad Aris Mining Marmato S.A.S y que debe ser revisada por el juez de instancia.

En segundo lugar, respecto del requisito de **subsidiariedad**, el inciso 4º del artículo 86 de la Norma Superior consagra que es requisito de procedencia de la acción de tutela y establece que *“esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”*.

Del análisis del asunto se desprende que la actora no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para hacer valer sus derechos, diferente al recurso de reposición, el cual fue agotado oportunamente. No existe, además,

⁴ M.P. Jaime Córdoba Triviño.

otra oportunidad procesal en la que sea susceptible resolver sobre la admisibilidad de la demanda, toda vez que el procedimiento establecido en la Ley 1274 de 2009 prohíbe la presentación de excepciones durante el trámite, hasta que el juez se pronuncie a través de la sentencia. Por lo anterior, se concluye que la presente acción cumple con el requisito de subsidiariedad.

Adicionalmente, se debe cumplir con el requisito de **inmediatez**, en este sentido, la Corte ha reiterado que, en aras de proteger la seguridad jurídica, la certeza sobre las decisiones judiciales y la autonomía de los jueces, la tutela contra providencias judiciales se erige como un recurso excepcional⁵, que procede en los casos en los que se presente violación flagrante y grosera a la Constitución por parte del funcionario judicial y se cumplan los requisitos generales y específicos de procedibilidad⁶.

En este sentido, el requisito de inmediatez, en este asunto se cumple cabalmente, pues la providencia que se ataca es del 13 de octubre de 2022 y la acción de tutela se interpuso el 25 de noviembre del año en curso. En consecuencia, es oportuno y razonable el tiempo transcurrido entre la providencia que se estima vulneratoria de derechos y la interposición de la tutela.

La demandante **identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos**, así como las irregularidades que, estiman, hacen procedente la acción de tutela. En efecto, la supuesta vulneración se deriva del desconocimiento del juzgado accionado al verificar el trámite dado a la negociación directa, los avisos remitidos y el tiempo de los mismos, decisión con la cual presuntamente se está vulnerando los derechos fundamentales.

La acción de tutela **no se dirige contra un fallo de tutela**. El demandante acusa: a) las decisiones adoptadas en el decreto de embargo de su mesada pensional y que afectan su mínimo vital.

En consideración a que se cumplen con todos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por tanto, este juzgado continuará con el análisis de los requisitos específicos de procedibilidad.

Requisitos específicos de procedencia de la acción tutela contra providencias judiciales

Los requisitos específicos aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales. De conformidad con la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional⁷, estos defectos son los siguientes:

Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia.

⁵ Sentencia SU 168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

⁶ Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño

⁷ T-666 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.⁸

Defecto fáctico: se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada.

Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.⁹

Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones.

Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida.¹⁰

Violación directa de la Constitución: se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política.

Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

Cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad en el caso bajo examen

⁸ Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): "... sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.

⁹ Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): "Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos - vía de hecho por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales."

¹⁰ Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

En el presente asunto, se tiene que el accionante sitúa el presente asunto de manera específica en haberse incurrido en un defecto fáctico, sustantivo y procedimental, este despacho considera que la misma se enmarca en la última causal referida por la parte.

Esta causal específica de procedibilidad se funda principalmente, en el desconocimiento de las formas propias de cada juicio por parte de la autoridad que tiene la competencia funcional para adelantar el proceso o actuación –art. 29 superior- y en la garantía de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas –art. 228 superior-.

Dichas formas se traducen en los procedimientos (conjunto sistemático de fases, etapas y estadios de impulsión) por medio de los cuales se desarrollan los procesos judiciales y/o administrativos.

La Corte ha reiterado que no cualquier yerro o vicio de procedimiento tiene la potencialidad de constituir defecto procedimental absoluto (máxime si este puede ser saneado o subsanado); por lo tanto, dicho defecto debe producir una amenaza y/o vulneración de tal magnitud, que afecte de forma directa los derechos fundamentales. En sentencia de Unificación SU- 061 de 2018, la Corte señaló:

“(...) el defecto procedimental se causa por un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de una controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de las formas propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización de los derechos fundamentales. De ahí que, a lo largo del desarrollo jurisprudencial (...)”.

Mediante providencia T-008 de 2019 se reitera el precedente de la Corporación, en el sentido de verificar ciertas condiciones ex – ante para el estudio del defecto procedimental absoluto, a saber:

- (i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
- (ii) Que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.
- (iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico.
- (iv) Que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales.

En suma, se configura el defecto procedimental absoluto cuando:

- a) El funcionario se aparta por completo de los procedimientos establecidos en la norma para el manejo de la contienda procesal, incurre en dilaciones injustificadas o recae en exceso ritual manifiesto.
- b) El referido actuar no pueda ser corregido o saneado e incida directamente en la decisión.

- c) Se de una relación de causalidad entre la irregularidad y la amenaza y/o violación de derechos de raigambre iusfundamental.

En este sentido, adentrándonos en el caso objeto de tutela, dispone el artículo 2 de la Ley 1274 de 2009, lo siguiente:

“NEGOCIACIÓN DIRECTA. Para el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos el interesado deberá adelantar el siguiente trámite:

1. El interesado deberá dar aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o al dueño de las mejoras, según el caso.

2. El aviso deberá realizarse mediante escrito y señalar:

a) La necesidad de ocupar permanente o transitoriamente el predio.

b) La extensión requerida determinada por linderos.

c) El tiempo de ocupación.

d) El documento que lo acredite como explorador, explotador, o transportador de hidrocarburos.

e) Invitación para convenir el monto de la indemnización por los perjuicios que se ocasionarán con los trabajos.

3. El aviso se entenderá surtido con su entrega material y con la remisión de una copia del mismo a los Representantes del Ministerio Público con competencia en la circunscripción en donde se ubique el predio.

4. Ejecutado el aviso se indicará la etapa de negociación directa entre las partes, la cual no excederá de veinte (20) días calendario, contados a partir de la entrega del aviso.

5. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el monto de la indemnización de perjuicios, se levantará un acta en la que consten las causas de la negociación fallida y el valor máximo ofrecido, firmado por las partes, con copia a cada una de ellas.

Si el proponente, poseedor o tenedor se abstiene de firmar el acta referida dentro del plazo señalado para la negociación directa, el interesado acudirá al representante del Ministerio Público o quien haga sus veces de la circunscripción del inmueble, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, deje constancia de tal situación.

PARÁGRAFO. *Igual tratamiento se dará a las personas que ocupen o posean tierras baldías”.*

Por su parte, el artículo 3 indica **“SOLICITUD DE AVALÚO DE PERJUICIOS. Agotada la etapa de negociación directa sin que hubiere acuerdo sobre el valor de la indemnización que deba pagarse por el ejercicio de las servidumbres o sin que hubiere sido posible dar el aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o al dueño de las mejoras, por lo menos dos (2) veces durante los veinte (20) días anteriores a la solicitud de avalúo de perjuicios, el interesado presentará ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud**

del avalúo de los perjuicios que se ocasionarán con los trabajos o actividades a realizar en ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos, la cual contendrá los siguientes requisitos (...). Negrilla del juzgado.

Como sustento del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, la actora a través de su apoderado judicial indicó que el titular minero deberá remitir un aviso por escrito al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos, tal como se señala en el Numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1274 de 2009; no obstante en el caso particular ello no ocurrió, pues los avisos y el oficio de “Fe de erratas” que fueron remitidos a los demandados, nunca se perfeccionó en debida forma en lo que respecta a la señora Eunice Ortiz de Ortiz.

Y en ese sentir, advierte que la guía No. 9134055426 fue recibida por un señor Jheison Rodríguez, mismo que es desconocido por la demandada, pues si bien la parte actora refiere que el señor no cuenta con poder u autorización para recibir notificaciones, lo cierto es, que para ello no se requiere, pues erra la parte actora al pensar que únicamente las notificaciones para su validez deben ser recibidas por la persona a notificar, sin embargo, si llama la atención de esta juez constitucional la manifestación categórica que hace la accionante al indicar que desconoce quién es él que firma dicha guía, aspecto que omitió el juzgado accionado, además de que posterior y en el transcurrir de dicho proceso se indicó la dirección de la señora Eunice.

Sumado a ello, se tiene que obra una siguiente guía 9142389499 de la empresa de correo servientrega del 10 de noviembre de 2021, la cual, según el sistema de rastreo habilitado en la página de dicha empresa de correo, aparece que ni siquiera fue salido a reparto, aspecto que también fue corroborado por esta juez constitucional, siendo carga de la parte actora demostrar que efectivamente remitió los avisos y estos fueron recibidos en debida forma, máxime que ello es un requisito para la admisión de la solicitud.

Además, se avizora que la sociedad **Aris Mining Marmato S.A.S** aportó con la demanda una certificación de aviso radial, misma que es expedida en un municipio ajeno al predio objeto de servidumbre, pues se evidencia que el mismo se adelantó en La Merced, Caldas., además que esta actuación no se encuentra contemplado en la Ley 1274 de 2009.

También se evidencia que la sociedad **Aris Mining Marmato S.A.S** incumplió los términos dispuestos para la negociación directa, pues los mencionados avisos fueron remitidos el 30 de junio de 2021, el 06 y 07 de agosto de 2021, a través de la emisora, y el 20 de agosto de 2021, y la demanda fue presentada el 22 de noviembre del mismo año, términos totalmente desfasados, sumado a que los avisos presuntamente remitidos nunca fueron entregados de manera efectiva.

Todo ello fue puesto en conocimiento del juzgado a través del recurso de reposición impetrado en contra del auto admisorio de la demanda, y este a través de providencia del 06 de septiembre del año en curso, dispuso:

“A raíz del estudio de sendos escritos, estima este Despacho que debe declararse la prosperidad del recurso por cuanto no se observa soporte del envío del aviso de negociación a la señora EUNICE ORTIZ. Es del juicio de este

Juzgado que deben protegerse los intereses de los intervinientes vinculados a este trámite, sin afectaciones a su garantía a tenerse por enterados oportunamente de las negociaciones respecto del gravamen a imponerse sobre el predio del cual son titulares de derechos” Otorgando el término para subsanar.

En el plenario se evidencia que la sociedad **Aris Mining Marmato S.A.S** adelanta una invitación a la poseedora para el 09 de septiembre de 2022 a las 10: 00 a.m a fin de llevar a cabo la negociación directa, a lo cual la demandada no se hizo presente, por ende, la sociedad levantó un acta dejando constancia de la no comparecencia de la poseedora interesada, en ese sentido, y bajo esta orbita, el despacho accionado mediante providencia del 19 de septiembre del año en curso, dispuso su admisión nuevamente, decisión contra la cual se presentó el recurso de reposición, y que es confirmada por el juzgado accionado.

Sobre este aspecto, considera esta judicatura se ha incurrido en el error procedimental absoluto, pues omitió el juzgado accionado aplicar en debida forma el procedimiento establecido en la Ley 1274 de 2009 *“Por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras”* aplicable en este asunto, pues el mismo fue creado únicamente para tasar el valor de los perjuicios que se deban pagar como indemnización por la imposición de la servidumbre, que debe ser retribuida por el demandante a favor del demandado.

Al admitirse el proceso, el Juez de conocimiento solo deberá tener en cuenta si el demandante cumplió con el trámite previo a la presentación de la demanda; a su vez se debe tener presente que en el numeral 3 del artículo 5 la Ley 1274 de 2009 *“Por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras”*, señala *“En el presente trámite no son admisibles excepciones de ninguna clase, pero en la decisión definitiva del avalúo, el Juez se pronunciará de oficio sobre las circunstancias contempladas en los numerales del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, y si encontrare establecida alguna, así lo expresará y se abstendrá de resolver.”* Aspecto que claramente no sucedió en las diligencias y fue puesto en conocimiento por la demandada afectada.

Sobre este punto, claramente se evidencia que el Juzgado al inadmitir la demanda busco que la sociedad subsanará los defectos anotados, y que no eran otra cosa, que demostrar que efectivamente enviaron los avisos conforme lo dispone el procedimiento, esto es, antes de activar el aparato jurisdiccional, sin embargo, la sociedad **Aris Mining Marmato S.A.S**, pretendió subsanar ello, remitiendo un nuevo aviso, pasando por alto, que dicha negociación se debe adelantar por lo menos dos veces durante los veinte (20) días anteriores a la solicitud de avalúo de perjuicios, esto es, antes de presentarse la demanda y no en el transcurso de la misma, como efectivamente sucedió en las diligencias.

En fin, razones abundan para atender las suplicas de esta acción constitucional, Colofón, se dejará sin efectos, inclusive, el auto del 19 de septiembre de 2022 por medio del cual se admitió la demanda, y los que allí se deriven, porque, a decir verdad, desde ese momento surge la problemática que instó la presentación de esta acción constitucional, para que en su lugar el Despacho resuelva de nuevo lo que corresponda, atendiendo con total apego lo dispuesto en la ley 1274 de 2009 que tiene que ver con la negociación previa, y el envío efectivo de los avisos.

De conformidad con lo expuesto, **EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO, CALDAS**, administrando justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la constitución,

FALLA

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso de la señora **Eunice Ortiz de Ortiz** en contra d del **Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato (Caldas)** a la que fueron vinculados **Aris Mining Marmato S.A.S**, **Gonzalo Ortiz Escudero**, **Gloria amparo Ortiz e Castro**, **Dra. Martha Isabel Pérez Villa** como curador Ad-Litem de los herederos indeterminados del señor **Heli de la Cruz Ortiz Escudero**, **la Sociedad Responsabilidad Ltda Valencia Perarla**, **la Sociedad Resposabilidad Ltda Vaencia Ayala**, **Silvia Patricia Ortiz Ortiz** en calidad de heredera del señor **Gonzalo Ortiz Escudero**, **Julio César**, **Jhon Fredy y Claudia Ortiz Viveros** hijos del señor **Heli de la Cruz Ortiz**, **María Viveros Moreno**, conforme a lo anteriormente expuesto.

SEGUNDO: Se ordena al **Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato (Caldas)**, que dentro del término de **cuarenta y ocho (48) horas** siguientes a la notificación de esta providencia, deje **sin efectos** el auto del 19 de septiembre de 2022, dictado dentro del proceso de avalúo de perjuicios de servidumbre minera, adelantado por **Aris Mining Marmato S.A.S** en contra de **Gonzalo Ortiz Escudero**, **Gloria amparo Ortiz e Castro**, **Dra. Martha Isabel Pérez Villa** como curador Ad-Litem de los herederos indeterminados del señor **Heli de la Cruz Ortiz Escudero**, **la Sociedad Responsabilidad Ltda Valencia Perarla**, **la Sociedad Resposabilidad Ltda Vaencia Ayala**, **Silvia Patricia Ortiz Ortiz** en calidad de heredera del señor **Gonzalo Ortiz Escudero**, **Julio César**, **Jhon Fredy y Claudia Ortiz Viveros** hijos del señor **Heli de la Cruz Ortiz**, **María Viveros Moreno y Eunice Ortiz de Ortiz**, y todas las actuaciones que de allí se deriven, para que, en su lugar, el Despacho resuelva de nuevo lo que corresponda, con base en los argumentos expuesto en la motiva de esta sentencia.

TERCERO: **Notificar** esta providencia a las partes por el medio más eficaz y expedito posible.

CUARTO: **Remitir** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado este fallo en oportunidad legal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:

Ruth Del Socorro Morales Patiño

Juez

Juzgado De Circuito

Civil

Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f1c5174800fa30f63fe92778308b3d2f84055375811afdb4f10cad1a4504c276**

Documento generado en 09/12/2022 05:07:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 09 de diciembre de 2022

1. Se realiza en la secretaría del juzgado la liquidación de costas a que fue condenada la parte demandada **Susuerte S.A** en pro del demandante **Mario Restrepo**, condena impuesta en sentencia de primera instancia.

Valor agencias en derecho: \$ 1.000.000

Total: \$ 1.000.000

2. Obra en las diligencias depósito judicial No. 41350000041885 del 07 de diciembre de 2022 y solicitud de ejecución presentada por el actor popular.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Rad. 2022-00043-01
Riosucio Caldas, nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Se **imparte aprobación** en todas sus partes a la anterior liquidación de costas realizada por secretaría, dentro de la acción popular promovido por **Mario Restrepo** contra **Susuerte S.A** al tenor de lo dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.

Ahora bien, como quiera que la sentencia de primera instancia se encuentra ejecutoriada, se procede a dar aplicación al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, disponiéndose:

CONFORMAR comité para verificar el cumplimiento de la sentencia, en el cual participaran la titular del despacho, el Personero de Supía (Caldas), el accionante y el designado por la entidad accionada. Diligencia en donde **Susuerte S.A**, deberá presentar el cronograma de actividades realizadas hasta la fecha de la audiencia.

Para instalar el comité de verificación se fija el **día lunes dieciséis (16) de enero de dos mil veintitrés (2023), a partir de las diez de la mañana (10:00 a.m)**, fecha más cercana disponible en el indicador de diligencias del juzgado.

En atención a que la parte accionada en tiempo oportuno realizó la consignación del depósito judicial que corresponde a la condena en costas, se ordena su entrega al accionante y, por ende, el despacho se abstiene de librar el mandamiento de pago solicitado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO

Juez

Ruth Del Socorro Morales Patiño

Juez(a)

Juzgado De Circuito - Civil Laboral 001 Riosucio

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

8b4ef49b2c364315179edd8b30d0fbb4cc560da67cbdd3b1a926092ca130f963

Documento firmado electrónicamente en 09-12-2022

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx>